

Hágase saber, y archívense á su vez estas diligencias, remitiéndose la copia certificada que corresponde.—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Zavala.*—*Sierra*, secretario.—Cuatro rúbricas.

Es copia que certifico. México, 25 de Febrero de 1875.—Por el C. secretario, *Manuel Fernandez Villarreal.*

AMPARO.

Promovido ante el juzgado de distrito de Coahuila por Ponciano Zamora, contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el C. presidente del ayuntamiento del Saltillo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez.

El promotor fiscal dice: que el reo Ponciano Zamora solicita el amparo de la justicia federal contra la sentencia de muerte á que fué condenado por el ciudadano presidente del ayuntamiento de esta ciudad, conforme á la ley de salteadores.

La solicitud se funda en la incompetencia de la autoridad que pronunció aquella sentencia, por ser ilegítima á causa de haber obedecido las órdenes del gobernador C. Victoriano Zepeda, despues de destituido por el Congreso del Estado, y ademas de esto, por tratarse de una pena que no tienen derecho para imponer las autoridades políticas, por impedirlo el art. 21 de la Constitución general de la República, y en fin se funda la solicitud, en que no existiendo pruebas plenas del delito de asalto en despoblado que se atribuye al quejoso, la expresada autoridad ha violado el art. 14

de la misma Constitución, aplicando la ley de salteadores que por falta de pruebas no es exactamente aplicable al caso.

Estos fundamentos de la solicitud no son bastantes para justificar la procedencia del amparo. La ilegitimidad en que se funda la incompetencia del referido presidente del Ayuntamiento, no se deduce del hecho de haber sido obedecidas las órdenes de un gobernador destituido. Este hecho producirá la responsabilidad; mas no la ilegitimidad en que el quejoso funda la incompetencia.

Tampoco puede existir esta incompetencia en el hecho de haber aplicado una pena propia de la autoridad judicial, porque se trata de un delito en el que está suspensa la garantía constitucional consignada en el art. 21 citado.

La debilidad de las pruebas del proceso no puede fundar la procedencia del recurso de amparo. El valor legal de las que existen y su eficacia, ha sido apreciada por la autoridad que designa la ley, y la calificación que de ella se hizo no está sujeta á la revision de ese juzgado. «El exámen circunstanciado de la mayor ó menor plenitud de las pruebas, es de la exclusiva competencia del juez del delito,» que en el caso lo es el C. presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad.

Ni puede decirse que ha sido juzgado el quejoso por una ley que no es exactamente aplicable al hecho que se le atribuye, porque la exactitud de la aplicacion se refiere á la naturaleza del delito y de ningun modo á la comprobacion mas ó menos perfecta de los hechos que lo constituyen. Esta es la interpolacion que se le ha dado al referido art. 14 en diversas ejecutorias de los tribunales federales.

Por tanto, si la apreciacion de las pruebas no importa una inexacta aplicacion de la ley; si la autoridad política tratándose de un delito de asalto en despoblado es competente para aplicar la pena de muerte; y si no existe en el mencionado Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad la ilegiti-

mudad que se le atribuye, es forzoso decir, que los fundamentos de la solicitud de amparo no justifican la procedencia de este recurso; por lo mismo el que lleva la voz, no puede pedir el amparo aunque lo deseen sus sentimientos humanitarios y el horror que le inspira la pena de muerte. Tiene que cumplir con su deber pidiendo al juzgado se sirva declarar, que no procede el amparo que solicita el expresado reo.

Saltillo, Julio 31 de 1874.—*E. Horcasitas.*—*Una rúbrica.*

Es copia que certifico. Saltillo á 23 de Setiembre de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—*A.*—*Antonio D. Treviño.*—*A.*—*J. Francisco Campos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, Setiembre 19 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por el reo Ponciano Zamora contra el C. presidente del ayuntamiento de esta ciudad, que lo condenó á la pena de muerte por suponerlo autor ó cómplice en los asesinatos cometidos en los puertos inmediatos á la hacienda de Agua Nueva; violándose de esta manera en su persona, las garantías que le otorgan los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución general de la República: el informe producido por el gobierno del Estado, como autoridad encargada de mandar ejecutar la sentencia pronunciada contra el quejoso, á quien se negó la gracia de indulto por la H. legislatura del Estado, y todo lo demás que de autos consta debió tenerse presente y ver convino. Y considerando con respecto á lo que concierne al art. 14:

1º Que el peticionario supone y cree violada en su persona la garantía otorgada por dicho artículo, en virtud de no haber sido aplicado con exactitud en la sentencia en que fué condenado; supuesto en su concepto la falta de prueba que las leyes requieren aun para los delitos mas ligeros.

2º Que el artículo 14 dice literalmente:

No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciar-

do, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. La simple lectura de este artículo, basta para dejar convencido el ánimo sobre la falsedad del raciocinio, en cuya virtud el quejoso pretende demostrar haberse violado por la autoridad que lo juzgó, la garantía que este artículo le otorga, al imponerle la pena última, dando mayor fuerza legal á las pruebas del proceso, que la que en su concepto y segun las leyes tiene en sí. La calificación sobre la mayor ó menor plenitud de las pruebas de la causa, corresponde al juez de ella, la autoridad que extralimita su deber al hacer su apreciación, será responsable ante la ley, y contra aquella cabrá el recurso de responsabilidad que ella establece; pero no podrá decirse que habrá violado la garantía que otorga el artículo 14, sobre todo cuando aplica una ley al hecho ó hechos á que ella se refiere y por cuya represión se ha dado.

Si la autoridad política que juzgó al quejoso como salteador y conforme á las prescripciones de la ley de la materia, hubiera pretendido aplicarle otra ley distinta, dada para la represión de otros hechos criminosos diversos del de asalto y plagio, en este caso era inculpa la procedencia del recurso de amparo, por la notoriedad de la violación del artículo 14 ya referido; mas no en el presente en que la autoridad política ha obrado conforme á la ley y á la Constitución; es decir, de conformidad con la ley de 3 de Mayo de 1873 sobre salteadores y plagiarios.

Considerando con relacion al artículo 16:

1º Que el promovente expone en apoyo de la violación de este artículo, lo siguiente: *que la autoridad política que lo juzgó, carecia de carácter y representacion de autoridad; que era un particular, y no solo un particular sino un delincuente incapáz de ejercer jurisdiccion.* Lo demostraré, (dice): —*«Sublevado D. Victoriano Cepeda contra la H. Legislatura del Estado y sus*

«instituciones, como lo justifica el veredicto «pronunciado el 9 del corriente por la actual Legislatura, dejó de ser gobernador desde el momento en que incurrió en el delito de rebelion, es decir, desde el 10 de «Setiembre de 1873, en que fué depuesto «por el decreto número 172; la autoridad política de esta ciudad que despues de esta «fecha reconoció al rebelde, le prestó obediencia, y apoyó su resistencia armada al «poder legislativo, se asoció al delito, se hizo cómplice, perdió la legitimidad de que «por otra parte carecia, toda vez que prorogó el ejercicio de sus funciones, mas allá «del término que fija la Constitucion particular del Estado.

«¿Y el cómplice en ese delito público y «notorio que por muchas leyes trae la pena «de destitucion, podrá decirse autoridad legítima? A la ilustracion de ese juzgado «no se esconde la negativa a esta pregunta. «Luego la autoridad ha sido doblemente incompetente para imponer penas propiamente tales, despues que por su complicidad en «la rebelion del gobernador, perdió la legitimidad de sus funciones. Y la garantía «del art. 16 se ha violado bajo dos aspectos.»

2º Que á la luz de una recta, prudente é imparcial apreciacion de los conceptos anteriores, sentados por el quejoso para fundar la incompetencia de la autoridad política que lo juzgó, y con ella la violacion del art. 16 de la Constitucion federal; todos sus raciocinios vienen por tierra ante las siguientes consideraciones:

1º Que el ocurrente no ha rendido prueba alguna sobre la incompetencia por falta de legitimidad de la autoridad política que lo juzgó; así como haber prorogado el ejercicio de sus funciones mas allá del término señalado por la Constitucion del Estado.

2º Que ni él ni su defensor interpusieron escepcion alguna al sustanciarse la causa sobre la incompetencia de aquella, segun consta del proceso respectivo, y este hecho solo justifica á la autoridad cuya legitimidad se objeta. (Ley 1ª Judicis. Ley 32,

tít. 2º Part. 3ª.—Ley 7ª, tít. 29, lib. II, N. R.)

3º La circunstancia de haber prestado la autoridad política mencionada su obediencia y apoyo al gobernador D. Victoriano Zepeda, despues que fué destituido del cargo de gobernador por el decreto núm. 172, si bien puede dar mérito á su destitucion, no lo dá como se pretende á su ilegitimidad por falta de título legal, para el ejercicio de su encargo, y mucho menos cuando la II. Legislatura ha confirmado y robustecido sus procedimientos en este asunto, avocándose el conocimiento de la causa, y negando la gracia de indulto solicitada por el quejoso.

Considerando con relacion al art. 21:

1º Que la garantía consignada en este artículo, está suspensa por la ley de 3 de Mayo de 1873 sobre salteadores y plagarios, prorogada por la de 10 de Abril del corriente año.

2º Que por las constancias que obran en el proceso, aparece probado el delito de asalto, porque fué juzgado el quejoso.

3º Que por el art. 23 puede imponerse la pena última, al convencido de traicion á la patria, al homicida con alevosía, al incendiario y al salteador de caminos.

Por todas estas consideraciones y con fundamento en los art. 101 y 102 de la Constitucion general de la República, se declara:

Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Ponciano Zamora, contra la sentencia de muerte pronunciada el 17 de Enero del corriente año, por el C. presidente del ayuntamiento de esta Ciudad. Notifíquese. Sáquense las copias de estilo, publíquese en el "Periódico Oficial" del Estado, y remítase el juicio á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos para su revision.

Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado, actuando con testigos de asistencia: Damos fé. Lic. Mariano Sanchez Peña.—

A.—Antonio D. Treviño.—A.—J. Francisco Campos.

Es copia que certifico. Saltillo, á 23 de Setiembre de 1874.—Lic. Mariano Sanchez Peña.—A.—Antonio D. Treviño.—A.—J. Francisco Campos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 24 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila, por Ponciano Zamora, contra el presidente municipal del Saltillo que lo condenó á muerte como reo de robo y homicidio en despoblado, con cuyo acto cree el quejoso vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los arts. 14, 16 y 21 de la constitucion general; y Considerando: que en el expediente aparece que el presidente municipal del Saltillo, procedió dentro de la órbita de sus facultades sin vulnerar las garantías invocadas; de conformidad con lo que dispone el art. 101 de la constitucion general, se decreta: que se confirma por sus propios fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 19 de Setiembre último, por el juzgado de Distrito de Coahuila que declaró: que la justicia de la Union no ampara ni protege al reo Ponciano Zamora, contra la sentencia de muerte pronunciada el 17 de Enero del corriente año, por el presidente del ayuntamiento de esta ciudad.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M. Iglesias.—M. Auza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Luis Velazquez.—

M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 15 de 1874.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila, por Gregorio Castillo, á nombre de su hijo Cástulo Castillo, contra el presidente municipal del Saltillo, que condenó á este á la última pena.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez:

El promotor fiscal dice: que el C. Gregorio del Castillo solicita el amparo de la Justicia de la Union para su hijo Cástulo, condenado á sufrir la pena de muerte por el Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, conforme á la ley de saltadores. Se funda la solicitud, en que no existiendo una prueba perfecta del delito que se persigue, la ley no es exactamente aplicable y se viola por este motivo el art. 14 de la Constitucion federal. Este razonamiento no es fundado ni justifica la procedencia del recurso de amparo.

La exactitud de la aplicacion de que habla aquel artículo, se contrae á la naturaleza del delito, es decir, exige que este sea el mismo que esté definido en la ley, mas de ningun modo puede referirse á la comprobacion mas ó menos perfecta de los hechos que la constituyen.

Esta interpretacion está admitida en la práctica de los tribunales federales, y fundada en diversas ejecutorias que van formando nuestra jurisprudencia federal.

Ademas de esto, el valor legal de las pruebas que existen en el proceso y su eficacia,